

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°355

Medellín, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUZ MERY ACEVEDO LOAIZA** contra los señores **MARTHA MARÍA ÁNGEL CALLE, WILLIAM CHAVARRIAGA VÉLEZ y COLPENSIONES.**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare existió un contrato de trabajo entre las partes, que inició con el señor **William Chavarriaga Vélez** el día **3 de agosto de 1994** y luego continuó por sustitución patronal con la señora **Martha María Ángel Calle** hasta el **30 de noviembre de 2018.**

Como consecuencia de esta declaración se condene a los empleadores a reconocer y pagar el auxilio de cesantía, los intereses a las cesantías, el vestido y calzado de labor, la indemnización por despido injusto y las sanciones moratorias por la no consignación del auxilio de cesantía (art.99 Ley 50/90) y por el no pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo (art.65 CST).

Así mismo, solicitó que se condene al pago de cálculo actuarial por los siguientes periodos, entre 2003 y 2010 y entre 2014 y 2018.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que laboró al servicio del señor **William Chavarriaga Vélez** desde 1994 y hasta 2015, para este último año comenzó a prestar los servicios a la señora **Martha María Ángel Calle**, en virtud de sustitución patronal hasta el **30 de noviembre de 2018**.

Su salario le era pagado diariamente y para la última anualidad ascendió a la suma de \$45.000 y su labor consistía en desarrollar actividades propias del hogar, sin que en desarrollo del contrato de trabajo se le entregara vestido y calzado, así como tampoco se le pagó el trabajo suplementario.

En vigencia del contrato de trabajo sus prestaciones sociales fueron liquidadas y pagadas sin consultar las normas laborales vigentes, así como tampoco se realizó cotizaciones en pensiones de forma regular.

Finalmente, no el auxilio de cesantía nunca fue consignado en un fondo y pese a que su contrato fue terminado sin una justa causa no se le reconoció el pago de la respectiva indemnización.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones a través de apoderada indicó que no le constan los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: falta de integración del litisconsorcio, obligación de presuntos empleadores de constituir cálculo actuarial, improcedencia de la obligación de recibir aporte en mora por ausencia de afiliación, inexistencia de obligación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

Respuesta William Chavarriaga Vélez y Martha María Ángel Calle

Los demandados dieron respuesta de forma conjunta precisando que no es cierto que la actora prestará sus servicios en los extremos indicados en la demanda, aclarando que entre el 6 de abril de 1995 y el 30 de abril de 1997 laboró para Ángel y Gómez Ltda, luego entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de mayo de 2002 lo hizo para Arrendamientos del Sur.

Solo desde el **12 de enero de 2005** comenzó a laborar para **Martha María Ángel Calle** dos días a la semana, contrato que finalizó el **31 de diciembre de 2009**.

Para el señor **William Chavarriaga Vélez** laboró desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2014, prestando sus servicios por días. Luego desde el 1 de enero de 2015 y hasta 2018 prestó nuevamente sus servicios a **Martha María Ángel Calle** a razón de 2 días por semana.

Teniendo en cuenta las condiciones de cada uno de los contratos sus prestaciones fueron liquidadas y pagadas de forma proporcional y se le entregó el respectivo vestido y calzado de labor.

Finalmente acepta lo referente al no pago de cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y señala que el contrato finalizó porque la señora **Martha María Ángel Calle** debido a una mala situación económica debió cambiar de domicilio y disminuir los servicios de la demandante a un día a la semana, condiciones que no fueron aceptadas por la actora, por lo que decidió no volver a trabajar.

Sentencia de primera instancia

La Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **7 de septiembre de 2022**, **declaró** que entre la actora y los demandados existió un vínculo laboral en el que operó la sustitución patronal cuyos extremos fueron del **12 de enero de 2005 al 30 de mayo de 2018**.

Como consecuencia de lo anterior condenó a los demandados de forma solidaria al reconocimiento y pago de la suma de **\$3'334.082** por concepto de prestaciones sociales, la indemnización por despido injusto en la suma de **\$7'937.135**.

Así mismo, **condenó** a los demandados a reconocer y pagar los aportes al sistema de seguridad social por todo el periodo de vigencia del contrato, teniendo en cuenta los días laborados para cada anualidad.

Esta decisión no la compartieron los apoderados de las partes, motivo por el cual la recurrieron en los siguientes términos:

Recurso parte demandante

El recurrente solicita que se **modifique** el extremo inicial de la relación laboral, el total de los días laborados para los demandados de forma mensual y anual por cuanto a su juicio la prueba recaudada no fue debidamente valorada, en particular la prueba documental presentada con la demanda.

En lo que refiere a la cuantía de la indemnización por despido injusto aduce que la misma debió fijarse en valor superior.

Finalmente, solicitó que se **revoque** la decisión de primera instancia en lo referente a la absolución de las indemnizaciones moratorias, toda vez que, a su juicio no se determinó la existencia de buena fe por parte de los demandados.

Recurso parte demandada

El apoderado de los demandados presentó su inconformidad respecto de la imposición de la prima de servicios, toda vez que esta prestación solo fue creada para los trabajadores del servicio doméstico a partir del 2016 cuando se profirió la Ley 1788.

Además de lo anterior solicita que se reconsidere el monto de la indemnización por despido injusto, toda vez que la modalidad contractual existente entre las partes era a término fijo en las que la tabla indemnizatoria es diferente.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, el apoderado de la demandante presentó alegaciones en las que amplió cada uno de los temas motivo de apelación indicando que un análisis detallado de la prueba testimonial permite situar el extremo inicial del contrato de trabajo el **1 de junio de 2002**.

En cuanto a los días laborados expresó que la juez falló teniendo en cuenta las liquidaciones presentadas por la parte demandada, desconociendo aquellas que fueron aportadas con la demanda y la prueba testimonial que daba cuenta que aunque la actora labora entre dos y tres días a la semana en la casa de los demandados, era enviada a prestar sus servicios a otros lugares laborando a su servicio durante toda una semana.

Finalmente, hizo alusión a que la parte demandada no actuó de buena fe en el desarrollo del contrato y en ese sentido le deben ser impuestas las sanciones moratorias reclamadas con la demanda.

Por su parte, la apoderada de **Colpensiones** presentó alegaciones en las que recordó que no existe responsabilidad en el caso estudiado por parte de la AFP recayendo la obligación de realizar el pago de cálculo actuarial en los empleadores que incumplieron el deber de afiliar.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia de conformidad con los recursos de apelación interpuestos, serán: (i) Establecer a través de la prueba aportada cual es el extremo inicial de la relación laboral existente entre las partes, (ii) Determinar la modalidad contractual que rigió la misma y en tal sentido revisar el valor de la indemnización por despido, (iii) Establecer si se demostró por parte de la actora la prestación del servicio durante un periodo mensual y anual al declarado por la juez a-quo, (iv) revisar si procede el reconocimiento y pago de la prima de servicios con anterioridad a la vigencia de la Ley 1788 de 2016 y (iv) Determinar si la conducta de los demandados durante la vigencia del contrato de trabajo estuvo desprovista de buena fe y en tal sentido proceden las sanciones moratorias reclamadas.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

- 1. En el expediente aparecen las siguientes liquidaciones de prestaciones sociales efectuadas por los empleadores **Martha María Ángel Calle** y **William Chavarriaga Vélez**:

Desde	Hasta	Días x semana	Salario diario	Folio
12/01/2005	23/12/2005	2	\$ 22.000	01/pág.176
12/12/2006	11/12/2006	2	\$ 23.000	01/pág.177
26/12/2006	24/12/2007	2	\$ 26.000	01/pág.178
24/12/2007	24/12/2008	2	\$ 27.000	01/pág.179
01/01/2009	31/12/2009	3	\$ 30.000	01/pág.180
01/01/2010	31/12/2010	7	\$ 12.857	01/pág.181
01/01/2011	31/12/2012	3	\$ 35.000	01/pág.182

01/01/2012	31/12/2012	7	\$ 16.000	01/pág.21 y 183
02/12/2012	02/12/2013	2	\$ 45.000	01/pág.22 y 184
02/01/2014	31/12/2014	2	\$ 50.000	01/pág.23 y 185
01/01/2015	31/12/2015	7	\$ 21.667	01/pág.186
01/01/2016	30/12/2016	7	\$ 28.600	01/pág.26 y 187
01/01/2017	31/12/2107	7	\$ 28.889	01/pág.27 y 188
01/01/2018	30/05/2018	4	\$ 50.000	01/pág.189

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

Extremo inicial de la relación de trabajo

Se discute por parte del apoderado de la parte actora el extremo inicial del contrato de trabajo fijado por la juez de primera instancia, puesto que a su juicio existen pruebas que dan cuenta de que la relación laboral entre las partes comenzó desde el año 2003, las cuales no fueron debidamente apreciadas, en ese sentido denuncia como no apreciada la liquidación de prestaciones sociales de los años 2003-2004 (01/pág.13) y los testimonios de las señoras Luz Alveny Zapata y Luz Mery Acevedo quienes dan cuenta que para el año 2003 la actora ya se encontraba prestando los servicios para los demandados.

En lo que refiere a la documental se encuentra que como anexo de la demanda se presentó documento que contiene la liquidación de prestaciones sociales del periodo comprendido entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004, que da cuenta de un total de 96 días laborados en ese periodo y cuya creación se atribuye a la señora **Martha María Ángel Calle**, la que en respuesta a la demanda desconoce el mismo por carecer de firmas (01/pág.168), sin que en el transcurso del proceso se demostrara su autenticidad.

Ahora, en lo referente a la prueba testimonial, debe indicar la Sala que la misma ninguna certeza produce frente al extremo inicial, así como en las condiciones en que se desarrolló el contrato de trabajo, por cuanto las declaraciones de las señoras **Luz Alveny Zapata** y **Aleida María Quiroz**, resultan poca claras y no permiten un establecimiento fidedigno de los hechos, pues de forma general su testimonio es gaseoso y especulativo, lo que resta eficacia probatoria, máxime cuando se trata de deponentes sobre las que pesaba la condición de testigos sospechosas por la familiaridad con la demandante.

En ese sentido, encuentra la Sala que existiendo certeza del extremo inicial a través de la confesión contenida en la respuesta a la demanda y la documental

suscrita por ambas partes (01/pág.176) a esta deberá estarse, encontrando la Sala acierto en lo concluido por la juez de primera instancia.

De los días en que se prestó los servicios a los demandados

Referente al número de días en que la demandante prestó sus servicios a los demandados en las diferentes anualidades aspecto que es aspecto de reparo por el apoderado de la parte actora, debe indicarse que la única prueba que permite determinar los mismos con exactitud son las liquidaciones de prestaciones sociales aportadas con la demanda y la contestación, que, dicho sea de paso, son las mismas y que contienen el número de días que se prestaban los servicios por año.

En este punto debe destacarse que ninguna certeza brinda la prueba testimonial, puesto que, los declaraciones de **Luz Alveny Zapata** y **Aleida María Quiroz**, en las que el apoderado del actor sustenta su reclamo, no otorgan certeza en este aspecto como quiera que si bien las testigos narraron que en algún momento prestaron sus servicios para los demandados, tal periodo de tiempo no es claramente determinado y en todo caso no fue concurrente con el laborado por la demandante, por lo que narran no corresponde a una reproducción de lo que observaran, sino de un conocimiento especulativo determinado a través de la propia experiencia.

En el anterior orden, encuentra la Sala que fue acertada la decisión de primera instancia en este aspecto motivo por el cual se **confirmará** el fallo apelado.

De la modalidad contractual entre las partes

Se indica por parte del apoderado de la parte demandante que la modalidad contractual que unió a las partes fue a término fijo, lo que implica que el valor de la indemnización debe ser inferior al fijado por la juez de primera instancia.

Referente a esta manifestación, la Sala advierte que la misma carece de cualquier sustento probatorio, y es que de conformidad con el artículo 46 del CST el contrato a término fijo siempre debe constar por escrito, formalidad que de conformidad con la jurisprudencia constituye un requisito *ad substantiam actus*, lo que implica que su prueba solo pueda hacerse con el mismo documento que le da origen.

En ese sentido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL-2804-2020, señaló:

Sin embargo, tal como se mencionó en líneas anteriores, en relación con los actos *ad substantiam actus* o *ad solemnitatem* existe una correspondencia entre su constitución y su prueba. Como el acto para su validez requiere el cumplimiento de una formalidad, esta viene a ser su único medio de prueba, ya que se confunde con el acto mismo. O para decirlo de otro modo, la forma es de la esencia del acto, de manera que la prueba de su existencia viene a ser el documento mismo.

(...)

En suma, la Corte rectifica su jurisprudencia en el sentido que los actos formales del Derecho del Trabajo como el contrato a término fijo, el acuerdo de salario integral o periodo de prueba, inexorablemente, no solo deben constar por escrito para su existencia (formalidad *ad substantiam actus* o *ad solemnitatem*) sino que su prueba no puede suplirse por un medio distinto al acto de constitución (formalidad *ad probationem*).

A partir de lo expresado encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia al determinar que el contrato existente entre las partes fue a término indefinido por lo que en este punto se **confirmará** el fallo apelado.

Del pago de la prima de servicios

En lo que refiere a la condena al pago de la prima de servicios en favor de la demandante por el periodo anterior al 30 de junio de 2016, advierte la Sala que en efecto incurrió la juez a-quo en un yerro al aplicar la ley, como quiera que esta prestación para los trabajadores del servicio doméstico fue consagrada por la Ley 1788 de 2016, vigente desde el 7 de julio de 2016.

Lo anterior implica que esta prestación social solo se cause a partir del segundo semestre de 2016, y dado que, la parte demandada efectuó el pago de la misma desde esta anualidad-incluso de forma completa- como se aprecia en las liquidaciones de los años 2016, 2017 y 2018 (01/págs.187-189) no hay lugar a condena alguna por este concepto.

En ese sentido se **revocará parcialmente** la condena impuesta a los demandados en el numeral segundo de la sentencia, manteniéndola exclusivamente en lo referente al pago de salarios insolutos del año 2006 (\$91.832) y las vacaciones del año 2009 (\$181.250), condenas que ascienden a la suma de **\$273.082**.

De la conducta de los demandados

Se solicita por parte del apoderado de la demandante que se imponga a los demandados el pago de las sanciones consagradas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de cesantías en vigencia del contrato de trabajo y la del artículo 65 del CST por haberse quedando adeudando salarios y prestaciones sociales a la fecha de terminación del contrato de trabajo.

En lo que refiere a esta pretensión es necesario recordar que la misma no tiene una imposición automática y en ese orden no existen unos parámetros de carácter objetivo para su imposición, debiéndose determinar en cada caso si la actuación del empleador como deudor estuvo precedida de buena fe, puesto que, existen razones atendibles para su incumplimiento (Sentencia SL-5685-2021).

En el caso bajo estudio, la juez de primera instancia consideró que los empleadores demandados obraron desprovistos del ánimo de desconocer las prestaciones sociales de su trabajadora, tanto así que liquidaron y pagaron las mismas, sin que el hecho de que no se hubiesen consignado las cesantías siguiendo el mandato legal sea constitutivo de mala fe, pues actuaron bajo el convencimiento de que el contrato entre las partes finalizaba cada año al liquidarse las respectivas prestaciones sociales.

A su vez, esta Sala advierte que el empleador bajo el error de que entre las partes existieron varios contratos de trabajo, procedía a liquidarlos anualmente con el correspondiente pago de la liquidación final de prestaciones sociales, interpretación que si bien fue desestimada con el análisis contenido en la sentencia, da cuenta de un elemento de buena fe consistente en satisfacer las acreencias laborales en favor de su trabajadora, por lo que en este aspecto se **confirmará** la decisión apelada.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el día **7 de septiembre de 2022**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUZ MERY ACEVEDO LOAIZA** contra los señores **MARTHA MARÍA ÁNGEL CALLE, WILLIAM CHAVARRIAGA VÉLEZ** y **COLPENSIONES, REVOCÁDOLA PARCIALMENTE** en cuanto impuso el pago de la prima de servicios para **ABSOLVER** a los empleadores de pago de ese rubro de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

En orden a lo anterior, el valor de la condena impuesta en el numeral segundo de la decisión apelada asciende a la suma de **\$273.082**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-018-2019-00606-01
Radicado Interno: P2972222
Asunto: Confirma y revoca sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Luz Mery Acevedo Loaiza
Demandado (s)	Martha María Ángel Calle, William Chavarriaga Vélez Y Colpensiones
Radicado	05001-31-05-018-2019-00606-01
Decisión	Confirma y revoca sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 24 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 24 de noviembre de 2022 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO